

COMPARECE - CONTESTA TRASLADO

Sr. JUEZ:

Carlos GONZALEZ QUINTANA - Abogado- M.F. T°503 F°107 de conformidad a la participación que tiene acorada en estos Autos Caratulados: "**CRUZ SILVIA MARCELA Y OTROS C/ MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERÍA DE LA NACIÓN S/ AMPARO AMBIENTAL - EXPTE N° 21076/2016**", fijando nuevo domicilio legal en calle Bolívar N° 362 - 6to E Centro - de esta Ciudad Capital de la Provincia de Córdoba, ante el Sr. Juez comparece y **DICE:**

I- EXORDIO:

Que en legal tiempo y debida forma viene a contestar **TRASLADO** del **PROVEÍDO** de fecha **13 de Septiembre de 2018 - VEM** - del Sr. Juez Federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, y que me fuera notificado mediante **Cédula de Notificación Electrónica N° 18000022073374 el día 16/10/2018** circunstancia ésta última, que demuestra la temporaneidad del presente, solicitando que luego de recibido, se eleve al superior a los efectos que pudieran corresponder y prosigase con la tramitación del amparo ambiental incoado, ello de conformidad a los antecedentes de hecho y derecho que se expresan a continuación:

II - HECHOS Y DERECHOS:

Que a fs. 1913/21 comparece el Dr. Gastón Valtier en su carácter de apoderado de la **Empresa PORTA HNOS** en los autos: "**CRUZ, SILVIA MARCELA Y OTROS c/ MINISTERIO DE ENERGIA DE LA NACIÓN s/ AMPARO AMBIENTAL**" (**Expte N° 21076/2016**) expresando agravios en el **Recurso de Reposición y de Apelación en Subsidio** interpuesto en contra del **PROVEIDO** de fecha 29/12/2017 del Sr. Juez Miguel Hugo Vaca Narvaja.

En el mismo el magistrado dispone **-invocando las facultades a que se refiere el art. 32 de la Ley 25.675 - lo siguiente:**

a) Librar "Oficio al Centro de Investigaciones del Medio Ambiente - Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, en su carácter de especialista en la temática ambiental, a fin de que informe al Tribunal la factibilidad de realizar un estudio sobre posible contaminación ambiental en la planta PORTA HNOS S.A. y b) librar "oficio al Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de la Plata, a fin de que informe a este Tribunal la posibilidad de practicar una inspección sobre 100 personas, seleccionadas aleatoriamente, por edades y proximidad a la planta PORTA HNOS. S.A. para detectar posibles patologías respiratorias y/o dérmicas. En caso de respuestas afirmativa, indique al Tribunal requisitos, condiciones y costos para realizar la misma y cualquier otro dato o información que considere relevante a los fines que hubiere lugar".

La codemandada aduce que lo ordenado por V.S. implica **"un uso extralimitado y por lo tanto arbitrario de las facultades previstas en el art. 32 de la Ley 25.675 en cuanto implican modificar el objeto de la demanda, y además importa desconocer los efectos de una resolución judicial firme pasada en autoridad de cosa juzgada recaída en la otra causa judicial, al tiempo que viola el derecho de defensa de mi mandante y el principio de congruencia"** (txt).

En lo medular, el recurrente plantea:

2.1. Mediante la resolución que se recurre V.S. ha modificado el objeto de la demanda.

De la lectura del escrito de demanda surge con prístina e indudable claridad, que los actores iniciaron la presente acción como una acción de amparo ambiental afirmando que existiría una supuesta omisión de la Secretaría de Energía, consistente en la supuesta falta de habilitación de la planta de bioetanol de "Porta Hnos." **(Aun cuando como se ha explicado no se encuentra alcanzada por la Ley 26.093)** Tanto es así que V.S. con fecha

27.04.2017, al rechazar la citación como tercero de la Municipalidad de Córdoba, resumió correctamente el objeto de la presente señalando que ... "la demanda centraliza su reclamo en torno a determinar, las actividades que desarrolla la Planta de Biotanol de la Empresa Porta y su encuadramiento o no, de su actividad a las leyes vigentes en el orden nacional, Ley 26.093 de biocombustibles y la Ley 25.675 general del ambiente".

En primer término y respecto a este párrafo es dable hacer la aclaración de que en un proceso judicial las posturas, expresiones o extremos que se invocan **NO SE EXPLICAN, SI NO MUY POR EL CONTRARIO SE PRUEBAN DE MANERA FEHACIENTE A TRAVES DE ELEMENTOS DEBIDAMENTE INCORPORADOS EN EL PLEITO DE QUE SE TRATA**, de manera que el director del proceso los valore de acuerdo a las reglas de la sana critica racional y sirvan para arribar a una justa conclusión. En este sentido, tanto la demandada como la codemandada empresa PORTA hnos. no han introducido al proceso, un solo elemento objetivo que acredite que en la Planta NO se produce BIOETANOL.

Muy por el contrario esta parte actora incorporó un enorme cumulo de prueba informativa donde los propios dueños de la empresa anunciaban el novedoso emprendimiento de producción de bioetanol en diferentes medios de alcance provincial y nacional, incluso en su propia página web. Situación ésta que, a pesar de haber transcurrido mas de dos años del inicio de la causa no se ha dilucidado el extremo denunciado en la demanda, y que por cierto fue, es y será potestad del magistrado interviniente, en virtud del mentado art. 32 de la ley 25.675, producir de manera oficiosa la prueba que considere menester a tales fines, que es sin ir mas lejos, EL MEOLLO DEL ASUNTO.

Vale la pena recordar también que, en virtud del principio de la carga probatoria invertida que rige en materia ambiental, reposa en cabeza de la demandada, acreditar que su actividad no infringe las leyes aducidas. NADA DE ESO SE HIZO.

NI LA EX -SECRETARÍA DE ENERGIA DE LA NACION, NI LA EMPRESA, NI EL PROPIO JUEZ, HAN DEMOSTRADO DE MANERA FEHACIENTE QUE LA EMPRESA NO PRODUCE BIOETANOL, SIN CAER EN AFIRMACIONES DOGMATICAS.

Pero siguiendo con el análisis de los agravios invocados y que se valoran en el presente traslado, el abogado Valtier expresa que: "En efecto, el objeto de la demanda se circunscribió a cuestionar la existencia o no de las "debidas habilitaciones", y la actora ofreció una extensa prueba documental e informativa, pero no ofreció prueba pericial alguna. Ahora bien, mediante la parte que se recurre de la Resolución del 29.12.2017, V.S. de oficio está modificando el objeto de la presente acción, reconduciendo el proceso a determinar la existencia o no "de contaminación en la Planta de Porta Hnos", y a "efectuar una inspección a 100 personas seleccionadas aleatoriamente, por edades y proximidad a la planta PORTA HNOS. S.A. para detectar posibles patologías respiratorias y/o dérmicas". Es indudable que lo resuelto de oficio por V.S. apunta a investigar la supuesta existencia de contaminación y de daños o afecciones a la salud, y a asignar responsabilidades. Esto indudablemente implica una modificación por parte de V.S. del objeto de la pretensión contenida en el escrito de demanda (..).

Si bien es cierto que en relación al objeto de la demanda (Acción Colectiva Ambiental) incoada por los vecinos amparistas textualmente reza:

"ORDENAR" a la "SECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN" (conf. Decreto 231/2015 de fecha 22/12/2015)¹ - (EX-SECRETARÍA DE ENERGÍA DE LA NACIÓN) O EL ORGANISMO QUE LA REEMPLACE, a los fines de que se sirva adoptar las medidas pertinentes tendientes a hacer "cesar la contaminación ambiental atmosférica" que afecta al sector, debido a la construcción y puesta en funcionamiento de la PLANTA DE BIOETANOL EMPLAZADA EN EL PREDIO DE LA EMPRESA PORTA HNOS. S.A. cuyo domicilio se

denuncia en calle Av. San Antonio Km 4 ½ B° San Antonio - de la Ciudad Capital de la Provincia de Córdoba, procediendo -de manera especial- a declarar y disponer -de manera urgente e inmediata- su **"CLAUSURA Y CIERRE DEFINITIVO", por carecer de "HABILITACIÓN LEGAL" y por no haber concluido de manera integral y previo a su construcción y puesta en funcionamiento con el Procedimiento Administrativo de "EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)"**(..)

En resumidas palabras, los vecinos reclaman ante la justicia federal, la clausura y cierre definitivo de la Planta de Bioetanol de la Empresa PORTA HNOS, por: **1)** carecer de **"Habilitación Legal"** que al efecto debe conferir la Ex-Secretaría de Energía de la Nación en el marco de la Ley Nacional N° 26.093 de Biocombustibles y por, **2)** no haber concluido de manera integral y previo a su construcción y puesta en funcionamiento con el Procedimiento Administrativo de **"Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)"** que comprende entre otras, la presentación por parte de la Empresa interesada del **"Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)"**; la convocatoria a los vecinos a las respectivas **"Audiencias Públicas (AP)"** y el otorgamiento de la **"Licencia Ambiental (LA)"** en la que se manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados, todo ello, de conformidad a lo preceptuado en los Arts. 11, 12, 13, 19, 20 y 21 de la Ley General del Ambiente N° 25.675 y Art. 6 de la Ley 26.093.

De manera especial, y a modo de resumen, al interponer la acción de amparo decíamos: "conforme a la documental analizada, surge claro e indubitable que **la Empresa de Bioetanol de Porta Hnos.: 1)** dio inicio a sus actividades a partir del mes de **febrero de 2012** ; **2)** presentó **Aviso de Proyecto** ante la Secretaría de Ambiente de la Provincia en julio de 2012 (25/07/2012), **es decir, cinco (5) meses después del inicio de las actividades**, violentando de este modo lo preceptuado en el art. 11 LGA 25.675 que exige que todo el procedimiento (EIA) debe iniciarse y finalizarse de manera íntegra y **previo a la construcción y puesta en funcionamiento**

del Emprendimiento de que se trate; 3) que como consecuencia de las irregularidades señaladas, la Empresa no ha podido tramitar -en tiempo y forma- la correspondiente "habilitación" ante la Secretaría de Energía de la Nación, en razón de no haber cumplimentado el procedimiento de "Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)", previsto -de modo especial- en el art. 6 de la Ley 26093 y -de modo general - en el art. 11 de la Ley 25.675, todas estas, **exigencias legales de cumplimiento previo y obligatorio para la obtención de la habilitación y posterior puesta en funcionamiento**".

También aseveramos, en la demanda que, **"nos encontramos frente a un planteo judicial donde la única prueba dirimente es la que acredita precisamente, la ausencia de Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), la no convocatoria a Audiencia Pública (AP) y falta de habilitación para funcionar de la Planta de Bioetanol de la Empresa Porta Hnos, expedida por la Secretaría de Energía de la Nación,** previstas en las legislaciones vigentes, circunstancias estas, que acreditan que la Empresa ha estado operando, durante todo este tiempo, en forma **"clandestina y de manera contraria a la Ley N° 26.093 "** (conf. Art. 8 inc. "d" Dcto 109/2007), situación esta última, que justifica ampliamente la procedencia de la medida intentada".

Que tal como podrá apreciarse, de la transcripción literal realizada supra, surge indubitable -en cada uno de los párrafos citados- que la demanda de amparo se centra en dos cuestiones: **1)** La falta de **habilitación** de la planta de bioetanol Porta Hnos que al efecto debe otorgar la Ex Secretaría de Energía de la Nación y **2)** el no cumplimiento integral, cabal y previo -a la construcción y puesta en funcionamiento de la citada Planta- del Procedimiento Administrativo de **Evaluación de Impacto Ambiental** (ausencia de EsIA, no convocatoria a AP, ausencia de IA).

De modo que en ningún momento se puso bajo el lente judicial ni tampoco se planteó como objeto del amparo, el carácter "contaminante" de la Planta de Bioetanol, y así expresamente lo dejamos plasmado en el escrito de amparo, al manifestar:

"De manera que, por la presente no se discute el carácter "CONTAMINANTE" de las actividades desarrolladas en la Planta de Bioetanol PORTA HNOS, muy por el contrario, lo que aquí se discute es si, la Empresa tiene las habilitaciones nacionales para funcionar y si cumplió con el procedimiento previo de EIA". (txt) .

Punto seguido, los recurrentes dicen:

2.2. La Resolución que se recurre desconoce resoluciones judiciales firmes con efectos de la cosa juzgada.

2.2.1. Adicionalmente a lo hasta aquí expuesto, corresponde agregar que las pericias ordenadas en la resolución recurrida y que son objeto del presente recurso, ya han sido practicadas en otra causa judicial, y como consecuencia de ello existe una resolución firme al respecto, pasada en autoridad de cosa juzgada. En efecto, como se puso en conocimiento de V.S. al contestar demanda y mediante nuestra presentación de fs....., los mismos actores que han iniciado este amparo oportunamente promovieron una denuncia en sede penal que tramitó bajo los autos "Actuaciones labradas por la Unidad Judicial 4 en sumario 5682/13 (310664) con motivo formulada por Cruz Silvia Marcela y otros c/Porta Hermanos S.A." (SACM N° 1747698), tramitados por ante la Fiscalía de Instrucción del Distrito Uno Tercer Turno, cuyas resoluciones fueron oportunamente ofrecidas como prueba por mi representada al contestar demanda en estas actuaciones.

2.2.2. En dicha causa penal se efectuó una pericia médica ambiental interdisciplinaria donde se concluyó en

la inexistencia de contaminación atribuible a Porta Hnos. Concretamente, en la resolución de la Fiscalía de fecha 3/3/2015 que resuelve archivar la denuncia se señala ..."

De este modo asumen decisiva importancia las razones proporcionadas por los peritos oficiales para fundar sus conclusiones. De las cuales se ha podido establecer que ninguna relación causal existe entre la instalación de la Fabrica Porta y la presencia de las sustancias que conforme la Ley 24.051 se reputan prohibidas cuando exceden el límite asignado."

"En definitiva ha quedado acreditado por medio de la pericia, la inexistencia de nexos causal, entre las afecciones y sintomatologías denunciadas por los querellantes y la actividad llevada a cabo en la planta de bioetanol de la empresa Porta Hermanos S.A...."

2.2.3. Esta decisión del Fiscal de Instrucción fue confirmada por el Fiscal de Cámara (14.01.2016), y por el Juez de Control (25.02.2016), por lo que el rechazo y archivo de la denuncia ha quedado firme. Tanto es así, que en una denuncia posterior en autos "Denuncia Formulada por Jacob Iris Abigail, Carballo, José David y Median Marta Iris" (Expte. N° 3338945), el Fiscal de Instrucción resolvió desestimar la denuncia promovida por las citadas personas contra la empresa Porta Hnos S.A. explicando que toda vez que si por medio de una resolución judicial firme, con peso de cosa juzgada, se ha descartado que la actividad productiva de la empresa Porta Hnos. S.A.A (en cualquiera de sus formas) sea configurativa de hechos de contaminación ambiental semejantes a los denunciados, es incorrecto establecer esa circunstancia inexistente como la conducta precedente que ha ocasionado un resultado posterior."

2.2.4. Por lo aquí expuesto, la Resolución del 29.12.2017 de V.S. materia del presente recurso, además de su

improcedencia procesal precedentemente analizada (modificar el objeto de la demanda), intenta volver a realizar pericias ya efectuadas en sede judicial, y que han dado lugar a resoluciones judiciales firmes. En función de lo expuesto, lo resuelto por V.S. resulta violatorio del art. 1777 del Código Civil y Comercial de la Nación, y abre la posibilidad de sentencias contradictorias, motivo por el cual debe ser revocado tal como aquí se peticiona.

Que en relación a la ausencia de nexo causal entre la actividad de la empresa y el hecho de contaminación denunciado por los vecinos en sede penal, cobran valor determinante los principios preventivos y precautorios aplicables en materia ambiental, según los cuales, no resulta necesario acreditar un daño sino justamente evitar que el mismo se produzca.

- **Principio de prevención:** Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir.

- **Principio precautorio:** Cuando haya peligro de daño grave o irreversible en el ambiente o en la salud de las personas la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente o poner en riesgo la salud de quienes gozan de él.

Siguiendo en el análisis del principio de **"cosa juzgada"** invocado por los recurrentes, la utilización de tal argumento por parte del abogado de la codemandada denota una supina ignorancia de la legislación vigente en materia ambiental, la que expresamente contempla:

"La sentencia hará cosa juzgada y tendrá efecto erga omnes, a excepción de que la acción sea rechazada, aunque

sea parcialmente, por cuestiones probatorias" (Art. 33 *in-fine* Ley 25.675).

Es decir, la normativa es clara y contundente al determinar que la cosa juzgada no rige cuando la acción es rechazada por "cuestiones probatorias". Precisamente, en la causa invocada por los recurrentes y que tramitó en Sede Penal, se dispuso el archivo de las actuaciones, motivado en cuestiones probatorias, en el caso, la pericia físico-química-médica interdisciplinaria, por lo que, mal podemos hablar de cosa juzgada cuando la máxima ley ambiental en el país la prohíbe cuando su desenlace se sustenta en cuestiones probatorias.

Resulta útil afirmar que el archivo de una denuncia no supone la muerte judicial de un hecho delictivo investigado, si no que habilita ante futuras y nuevas circunstancias probatorias, reabrir la investigación de acuerdo al caso concreto.

Para mayor abundancia e ilustración de las partes, desde la **Doctrina** se nos indica que; "en este supuesto excepcional de que la demanda sea rechazada "por cuestiones probatorias", es el único caso en que la sentencia dictada no alcanza la calidad de cosa juzgada con relación a las pretensiones formuladas; por lo tanto, la misma actora que dedujo el juicio anterior o cualquier otro afectado podría iniciar y ganar un nuevo proceso si cuentan con pruebas que no se han hecho valer en su momento y las aportan en el nuevo juicio, pero, cabe reiterarlo, deben aportarse nuevos elementos, porque si se presentan los mismos que ya han sido valorados en la sentencia anterior, este pronunciamiento mantiene plena vigencia e inmutabilidad" ("Proceso Colectivo Ambiental - Efectos de la Sentencia", Roberto G. Loutayf Ranea y Fernando Virgili - Publicado en la Obra Colectiva Perspectivas sobre Derecho Ambiental y de Sustentabilidad", Ed. EUCASA Ediciones Universidad Católica de Salta, Año 2007, t.II pag. 323 y ss).

Que en el caso, la "prueba nueva" que se hizo valer en las presentes actuaciones es precisamente, la **NOTA D.C.L. 1230** (Ref Expte. SO1: 0278063/2015) de fecha 02/10/2015, suscripta por Lic. Diego Rozengarth - Director de Combustibles Líquidos - Subsecretaría de Combustibles - Secretaría de Energía - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, dirigida al Subsecretario General - Defensoría del Pueblo de la Nación - Dr. Juan José BOCKEL - en donde manifestó de forma textual al sr. Defensor del Pueblo de la Nación:

"Me dirijo a usted con motivo de la presentación ingresada bajo el número de referencia y en el marco de la actuación N° 6169/15 caratulada "Impacto ambiental vinculado con industria", que tramita ante esa Defensoría, por medio de la cual se investigan presuntos daños ambientales derivados de la actividad de la planta de Bioetanol del Establecimiento Porta Hermanos S.A. ubicada en la Av Vaparaíso al 5000, Departamento Capital, Provincia de Córdoba".

"Al respecto, se hace saber a esa Defensoría que no existe ante esta Dependencia registro de habilitación alguno acerca de una planta elaboradora de Bioetanol ubicada en la dirección citada, como tampoco existe una planta elaboradora de Bioetanol habilitada por esta Secretaría a nombre de Porta Hermanos S.A.". (Ver Prueba N°1).

En idéntico sentido se ha pronunciado la **Jurisprudencia**, al señalar:

*"En el ya citado fallo **"Halabi"**, la Corte Suprema ha destacado, como de la esencia de las acciones colectivas el carácter erga omnes de la sentencia emitida en el proceso. El voto de la mayoría del Alto Tribunal en tal precedente distingue, por un lado, los derechos individuales, y por el otro, los derechos de incidencia colectiva. Y entre estos últimos, diferencia los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, de los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, los que conforman las "acciones de clase". Con*

relación a los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos (como es el presente, donde se pretende la protección y reparación del bien jurídico colectivo ambiente), ha señalado la Corte que cuando en estos casos se ejerce "en forma individual una pretensión procesal para la prevención o reparación del perjuicio causado a un bien colectivo, se obtiene una decisión cuyos efectos repercuten sobre el objeto de la causa petendi, pero no hay beneficio directo para el individuo que ostenta la legitimación" (consid. 11)." (.) **"También la Ley General del Ambiente en su artículo 33 regula los efectos de la cosa juzgada en materia de procesos por daño ambiental: "La sentencia hará cosa juzgada y tendrá efecto erga omnes, a excepción de que la acción sea rechazada, aunque sea parcialmente, por cuestiones probatorias."** (Informe Nacional Argentino presentado en la XXV Jornada Iberoamericana de Derecho Procesal y XI Jornadas Brasileñas, Recife 2016) (Según cita en: "Mercado Amelia Emilia y otros c/ Municipalidad de la Ciudad de Salta y otros s/ amparo" - Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta - Juzgado: 3 - 14-ago-2017 - Publicado en: MJ-JU-M-106704-AR | MJJ106704 | MJJ106704)

Por tal motivo, debe rechazarse el pedido de valor de Cosa Juzgada invocada por los recurrentes en el agravio invocado como sustento recursivo.

IV. LA ELECCION DE UN ORGANISMO EN EXTRAÑA JURIDICCIÓN. POSIBLE RAZON.

4.1. Sin perjuicio de lo expuesto hasta el presente, una nueva cuestión aparece en la resolución impugnada que es de por sí sola llamativa: la elección de la Universidad de La Plata como órgano para realizar la pericia ambiental ordenada. En efecto, en el decisorio en crisis, V.S. ha dispuesto librar un oficio al "Centro de Investigaciones del Medio Ambiente - Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, en su carácter de especialista en la temática ambiental, a fin de que informe al Tribunal la

factibilidad de realizar un estudio sobre posible contaminación ambiental en la planta PORTA HNOS S.A., cuya actividad consiste en la fabricación de -elaboración de bebidas, alcohol, medicamentos, perfumes, cosméticos y domisanitarios, -planta de bioetanol anhidro a partir de maíz y sus productos, entre otras actividades"

4.2. En otras palabras V.S. sin mayores fundamentos (...en su carácter de especialista en la temática ambiental...), decide designar a la Universidad Nacional de La Plata. Como vemos, el fundamento es vago, infundado, poco claro y de una orfandad llamativa.

De donde surge el carácter de especialista en la temática ambiental, es realmente un enigma. V.S. tampoco lo explica.

4.3. Cabe preguntarse en primer término, cual es el motivo por el cual, existiendo dentro de la Provincia de Córdoba universidades de igual o mayor prestigio que la de La Plata (p.e. Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Universidad Tecnológica Nacional con sede en Córdoba y), V.S. ha dispuesto encomendar la labor a la de La Plata. En tal sentido corresponde señalar que no existe en ningún medio especializado en temas ambientales una distinción honorífica, algún comentario y/o galardón, que le adjudique a la Universidad Nacional de La Plata un reconocimiento de tal naturaleza por encima de las restantes del país, incluyendo las situadas dentro de la Provincia de Córdoba.

4.4. Sin lugar a dudas, se trata de una decisión irrazonable y arbitraria, por cuanto:

a) No se acredita que las universidades locales no sean idóneas para su producción.

b) No se funda en razones objetivas, fácilmente demostrables y/o verificables.

c) La afirmación del carácter de especialista surge de la sola voluntad de V.S.

4.5. Cabe preguntarse, previa demostración de que las universidades locales no pueden llevar adelante la tarea -lo que importaría subestimar su capacidad y ofender a todo el claustro de especialistas y profesores que trabajan en ella-, cuál es el motivo por el que se elige a la de La Plata y no a la de Buenos Aires, la de Corrientes, la de Salta o a cualquier otra, inclusive del extranjero. Claramente, no hay respuesta. Esta parte está casi segura que la Universidad de Buenos Aires, o la Universidad Nacional de Córdoba, o la Universidad Tecnológica Nacional (por ejemplo), cuentan con mayor prestigio, galardones y menciones en materia ambiental que la Universidad de la Plata. No cabe dudas entonces que el fundamento de selección dispuesto en la resolución recurrida viola las garantías constitucionales mínimas que emanan del art. 18 de la Constitución Nacional (debido proceso, derecho de defensa y tutela judicial efectiva), dado que el modo de selección genera serias y legítimas dudas sobre la imparcialidad y objetividad del organismo seleccionado.

Ni un solo párrafo del agravio expresado en este punto puede tener especial consideración por VS toda vez que mas allá del insignificante valor o mas bien la poca importancia que pueda tener la frase "especialista en la temática ambiental", haciendo referencia a la Universidad de la Plata, el magistrado ha seleccionado de acuerdo a su mejor y mas elevado criterio a dicha casa de estudios, elección que por cierto puede garantizar mayor imparcialidad en las conclusiones arribadas, toda vez que son ajenas a la jurisdicción del tribunal y del domicilio de las partes. No debemos descuidar la gran capacidad de lobby empresarial que PORTA Hnos ostenta en esta provincia, empresa que elabora convenios con la UNC y la UTN justamente por la magnitud de su emprendimiento fabril, con probables contactos en ámbitos académicos provinciales (Ciencias Exactas Físicas y

Naturales, Ciencias Químicas, etc.), incluso celebrando convenios de pasantías con estudiantes universitarios y de capacitación y formación de profesionales universitarios.

Lo cierto es que V.S. ha escogido esa alta casa de estudios de la Provincia de Buenos Aires haciendo uso de las facultades que le otorga el mencionado artículo 32° de la Ley 25675, sin que esto signifique una extralimitación de las mismas. Mucho menos una flagrante violación al derecho de defensa del debido proceso, toda vez que no se le ha vulnerado en lo mas mínimo el derecho que a las partes le asiste a la hora de proponer peritos de control de su confianza. Esta parte no lo ha hecho porque no acuerda -y se ha discutido con el remedio procesal idóneo- con el criterio del VS a la hora de producir una prueba ajena al objeto del amparo, pero de mas esta decirlo, en el caso de resultar confirmada la prueba pericial interdisciplinaria sobre el barrio y los 100 vecinos seleccionados, haremos uso de esta facultad procesal, que hace a la garantía del derecho de defensa en juicio.

En otro punto el recurrente menciona que "Se suma a esta inconveniente y extraña decisión inconsulta y de dudoso fundamento, que de llevarse adelante la misma, generará más molestias que beneficios. En primer lugar, un tema de distancia. En efecto, la locación de una Universidad elegida sin fundamento aparente, resulta inconveniente a la hora de contrastar la situación con las universidades locales, que están en los alrededores del tribunal y de las partes. Ello importaría mayores costos -por el solo hecho de la lejanía. Piénsese solamente en el traslado de profesionales, equipamientos, muestras, etc.

4.7. Adicionalmente, importaría continuar alongando innecesariamente el proceso, dado que dichos traslados, verificaciones de estado de cosas, eventuales nuevas revisiones, etc., a la considerable distancia del

lugar de los hechos, lo único que hará será entorpecer el curso del proceso. Entonces, además del dispendio jurisdiccional innecesario que importaría mantener la decisión, es otra acabada muestra de la desnaturalización del amparo, y afectación del derecho de mi representada de obtener decisión judicial en un plazo razonable.

Tal situación tampoco podría resultar agravante para la codemandada toda vez que los costos de la pericia ordenada correrían por exclusiva cuenta del tribunal a través del presupuesto asignado por la CSJN para estos asuntos técnicos, no recayendo sobre las partes el financiamiento de la misma.

Siguiendo el desarrollo del agravio expresado es dable recordar que fue la codemandada quien produjo innumerables dilaciones en el proceso, a través de cuatro recusaciones al Juez que mantuvieron la causa alejada de su jurisdicción durante meses, ya que al retirarle el expediente por mandato procesal, el mismo recaía en poder de un juez ajeno que se abstuvo en todas las ocasiones de avanzar con el proceso mientras dichos incidentes eran resueltos una y otra vez por la Excma Cámara de Apelaciones, de modo que es inaceptable y hasta provocativo leer este tipo de argumentos, que reclaman “el derecho de mi representada de obtener decisión judicial en un plazo razonable”, cuando es la propia empresa a través de sus abogados, quienes mantienen el curso del proceso alejado de un horizonte resolutivo a corto plazo.

4.9.Posible fundamento

4.9.1.Mi representada ha intentado averiguar qué pudo llevar a V.S. a ordenar dicha decisión. Pues bien, habiendo realizado las investigaciones del caso, esta parte ha podido entender la designación de dicha universidad.

El único motivo que puede haber llevado a V.S. a designar dicho claustro universitario, es la aceptada y fluida relación del Dr. Darío Ávila Vazquez,

quien fuera letrado de los actores en distintos reclamos administrativos, con la referida universidad, a través de su hermano el Dr. Medardo Ávila Vazques, quien a su vez es médico consultor de los amparistas y ha sido ofrecido como testigo por esa parte.

4.9.2 En efecto, el Dr. Medardo Ávila - hermano de uno de los letrados de los actores- ha trabajado en equipos de investigación interdisciplinarios en los cuales todos los peritajes los termina analizando el laboratorio de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Dicha vinculación surge de los siguientes enlaces que pueden consultarse libremente desde cualquier medio informático, consistentes en una serie artículos publicados en diversos medios -incluyendo la propia universidad-, que seguidamente se detallan.

El argumento esbozado en el agravio del punto anterior es una nueva "chicana judicial" que debe ser tenida en esos términos, con la debido llamado de atención a la parte contraria que a VS le cabe formular, toda vez que raya lo absurdo y solo pretende hacer incurrir en error al juzgador.

En ese sentido cabe aclarar lo siguiente: El Sr. Darío Ávila NO POSEE SEGUNDO APELLIDO, ni Vázquez ni NINGUNO. Es Ávila "a secas", es abogado es cierto pero no participa ni ha participado de manera profesional en el proceso judicial que nos ocupa.

No existe ningún vínculo de parentesco entre el Sr. Darío Ávila (Abogado) y el Sr. Medardo Ávila Vázquez (Médico Pediatra), lo que echa por tierra los argumentos falaces y mendaces inventados por el abogado Valtier, y que solo existen en su imaginario y demás elucubraciones, con la única finalidad de inducir a error al tribunal con una chicana mas a las que nos tiene acostumbrados este abogado de la empresa codemandada, quien al carecer de conocimientos jurídicos técnicos y legislativos en materia ambiental apela a estos argumentos

"tribuneros" que flaco favor le hacen al fin ultimo del proceso, dilucidar los extremos invocados por las partes y arribar a una sentencia justa, que se hace esperar mas de la cuenta.

III- PETITORIO:

Por todo lo expuesto, **SOLICITAMOS** a
V.S.:

1- Me tenga por presentado, por parte en el carácter invocado y por rectificado el domicilio procesal.

2- Tenga por evacuado en tiempo y forma el traslado oportunamente cursado.

3- Téngase presente lo manifestado en relación al objeto del amparo (punto 1 y 2) y el no cuestionamiento del carácter "contaminante" de la Planta de Bioetanol de la Empresa PORTA HNOS S.A.

4- Rechacese el planteo de nulidad. Con Costas.

**Proveer de conformidad y
SERÁ JUSTICIA**